

Índice de Noticias

SECTOR SOCIAL

• Diario Publico (09/04/2010)	32
• El País (09/04/2010)	42
• Propiedades (09/04/2010)	4
• Levante - El Mercantil Valenciano (07/04/2010)	17
• Levante - El Mercantil Valenciano (06/04/2010)	8
• El Diario Vasco (05/04/2010)	6



España destina 100 millones a los gitanos

El Gobierno, anfitrión de la cumbre europea, aprobará hoy un Plan de Acción

OLIVIA CARBALLAR
CÓRDOBA

¿Servirá de algo? Fue la pregunta más escuchada ayer en los corrillos extraoficiales, entre café y café, durante la inauguración de la II Cumbre Europea sobre la Población Gitana. Y España, anfitriona del encuentro en Córdoba, apostó por predicar con el ejemplo. La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, anunció la puesta en marcha de un Plan de Acción para el desarrollo de la Población Gitana (2010-2012) con una dotación presupuestaria de 107 millones de euros.

La medida, que será aprobado hoy por el Consejo de Ministros, se traducirá en actuaciones concretas en los ámbitos donde los gitanos sufren una mayor exclusión. En educación, el Gobierno intentará frenar el fracaso escolar trabajando codo con codo en escuelas y barrios. Además, creará becas con financiación pública y privada para que los jóvenes lleguen a la Universidad.

En el ámbito de la vivienda, otro talón de aquiles, el plan, en el que han participado varios ministerios, pretende erradicar de raíz el chabolismo. En este marco, el Ministerio de Vivienda destinará 40 millones para que los gitanos accedan a casas de protección

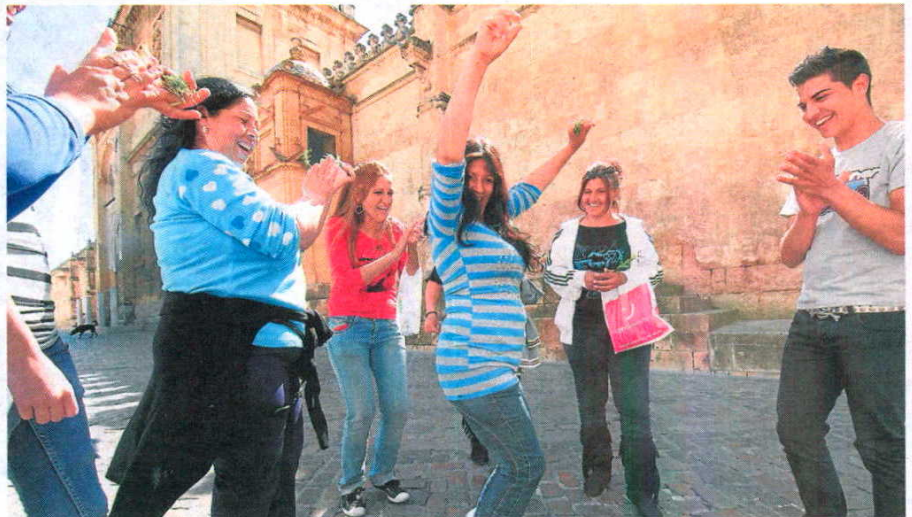
oficial y reciban ayudas al alquiler. Sobre el empleo, incide en la incorporación de la mujer al mercado laboral—el 70% se dedica al hogar—.

Además, se desarrollarán programas de planificación sexual y la inclusión de los niños en planes bucodentales. “Los políticos toman conciencia”, dijo Antonio Vázquez, vicepresidente del Consejo Estatal del Pueblo Gitano. “Hay que dejar las palabras y actuar”, añadió la consejera andaluza de Igualdad, Micaela Navarro, que pidió también el compromiso de los gitanos.

Autocrítica a medias

¿Se podía haber avanzado más desde la primera cumbre, en septiembre de 2008? Fue la segunda pregunta más susurrada en los corrillos e, incluso, sugerida en voz alta en alguna ponencia. “Tenemos las herramientas, no podemos seguir perdiendo el tiempo”, espetó la vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding. Una autocrítica que obvió, no obstante, la pasividad que le recrimina el Parlamento.

También advirtió Reding a los países candidatos a la UE que las políticas intolerantes no tienen cabida. Ni una palabra sobre Italia, Estado miembro donde los gitanos han sido claramente perseguidos. •



Estela, en el centro, baila junto a otras gitanas, junto a la mezquita de Córdoba. RAÚL CARO

«Somos las últimas en la tienda y nos atienden las primeras»

Reportaje

O. C.
CÓRDOBA

Mientras el filántropo y especulador George Soros, de puertas de la cumbre para dentro, exigía a la Comisión Europea que se pusiera las pilas, un grupo de gitanas del barrio cordobés de Las Moreras explicaba a *Publico* sus penurias de puertas de la cumbre para fuera. “Porque está claro que nosotras no podemos entrar ahí, ¿no?”, se preguntaba escéptica Rosa Rodríguez, una joven de 30 años con su hijo de tres meses en los brazos. No han estudiado, no tienen trabajo y se sienten discriminadas por ser gitanas. Venden romero en los alrededores de la mezquita.

“Lo que pedimos es que venga el alcalde, que tome nuestros datos y nos dé trabajo, aunque sea barriendo las calles, pero lo que no puede es prohibirnos vender romero

y no damos alternativas”, explica su hermana Ofelia, de 38 años. Todos en casa están en paro. Viven hacinados en pisos pequeños y, lo que consideran aún peor, son vistas como bichos. “Si entramos las últimas en una tienda, nos atienden las primeras por miedo a que les robemos. Se cambian el bolso de sitio, y eso duele, no todos los gitanos somos malos ni todos los payos son buenos”, afirma la matriarca, Mari Cruz Rodríguez, de 50 años.

A ella, dice, le hubiera gustado ser política. Y no le falta carisma. “Nosotros queremos integrarnos, pero no nos dejan, y, sin embargo, cuando hay una guerra, mandan allí a nuestros hijos. Para eso sí somos todos españoles, pero luego si falta un mechero la culpa es nuestra”, añade. “Y lo mejor que haces es callarte, porque llevas todas las de perder”, explica su nieta Natalia Cortés, de 25 años.

Son conscientes de que se

Un grupo de gitanas explica la discriminación que sufren a diario

«Nos prohíben vender romero, pero no nos dan trabajo», aseguran

«Una cumbre no elimina el racismo, sino el cambio de mentalidad»

está celebrando una cumbre para mejorar la situación de su pueblo, pero son pesimistas sobre los resultados. “El racismo no lo elimina una cumbre, sólo el cambio de mentalidad”, dicen con palabras que nada tienen que envidiar a las que pronuncian dentro los expertos. Ni Mercedes Rodríguez ni su hermana Estela entienden por qué a los payos les cuesta tanto aceptarlas. “Yo estoy casada con un castellano y mi suegra no se fía”, dice Estela, que quiere que sus hijos sean abogados o policías.

A Judith le molesta que en la tele siempre se hable de los gitanos como “algo diferente”. “Nadie protesta por nosotras”, concluye Ángeles Fernández, de 45 años. “No tenemos defensa ni credibilidad”, remata Mari Cruz, que no se avergüenza de su mella. La cumbre sigue dentro. Ellas ahogan las penas fuera. Bailando. •



La vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding (izquierda), la ministra de Sanidad y Política Social española, Trinidad Jiménez (centro), y la cantante Ana Montaña. / F. J. VARGAS

107 millones para un plan de integración de los gitanos

MANUEL J. ALBERT
Córdoba

El Consejo de Ministros va a aprobar hoy el Plan de Acción para el desarrollo de la población gitana, con vigencia hasta

2012. Un plan que invertirá 107 millones de euros en proyectos de inclusión para una etnia que aún sufre discriminación y prejuicios sociales en toda Europa, también en España, donde viven unas 700.000 personas gitanas.

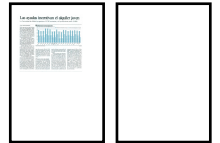
La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, anunció ayer la medida durante la segunda Cumbre Europea sobre la Población Gitana, que se ha celebrado en Córdoba, y en la que intervinieron la vicepresidenta

de la Comisión Europea, Viviane Reding, y la vicesecretaria general de la ONU, Kori Udovicki. Precisamente ayer el mundo celebraba el Día Internacional del Pueblo Gitano.

El plan anunciado por Jiménez pretende mejorar la situación de este colectivo en educación, empleo, sanidad y vivienda, tratando especialmente el caso de las mujeres gitanas, precisamente los puntos más sensibles que ha detectado la Comisión Europea en todo el continente.

En cuanto a sanidad, la comunidad gitana presenta, en general, una mayor incidencia en enfermedades crónicas, al igual que otros colectivos sociales desfavorecidos. En educación, uno de los pilares fundamentales de las medidas de inclusión tratados ayer en la cumbre, el Gobierno quiere luchar contra el fracaso escolar de los adolescentes gitanos, aprovechando que la escolarización en primaria se ha normalizado, ya que más del 90% del alumnado gitano asiste regularmente a clase.

El fundador y presidente del Open Society Institute, el multimillonario de origen húngaro George Soros, también subrayó, tras su intervención, la importancia vital de las políticas educativas. Soros reclamó más fondos en estas estrategias e insistió en la necesidad de invertir, sobre todo, en la Educación Primaria, "porque sólo así, cultivando líderes, se podrá salir del círculo vicioso de la exclusión".



Las ayudas incentivan el alquiler joven

La Comunidad de Madrid ya gestiona 16.700 contratos y el Ayuntamiento otros 12.800

JUAN CARLOS MARTÍNEZ

Desde que entró en vigor la Renta Básica de Emancipación (RBE) hace dos años, el Ministerio de Vivienda ha destinado casi 500 millones de euros a 197.000 hogares; 480 millones en mensualidades y avales y 11 a préstamos para la fianza, según datos facilitados por Vivienda al cierre del primer trimestre del presente año.

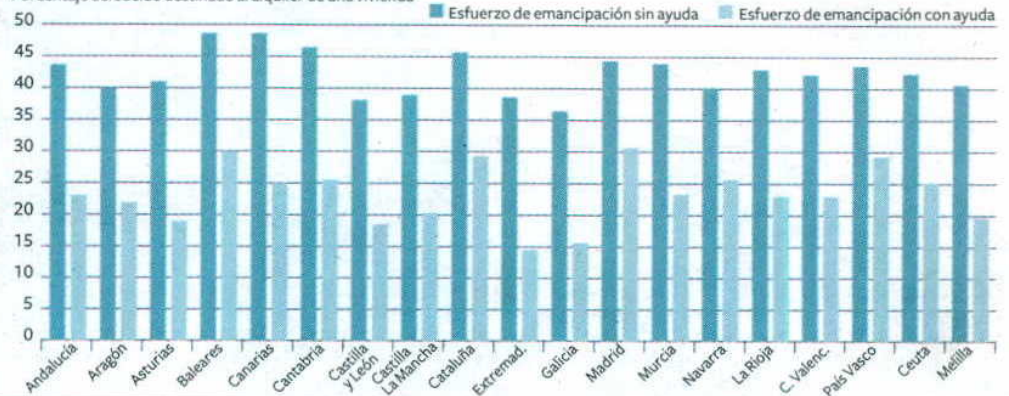
En Madrid, la ayuda al alquiler de 210 euros la perciben ya 30.990 jóvenes de entre 22 y 30 años, y otros 1.245 están a punto de hacerlo. Las solicitudes enviadas al Ministerio desde la Comunidad superan las 43.000.

Carlos Labarga (33 años) no puede acogerse a esta ayuda, pero ha propuesto al dueño de un apartamento en Arturo Soria alquilarlo por 825 euros, acogiéndose al Plan Alquiler del gobierno regional (seguro más arbitraje): "Los dos saldríamos beneficiados. Y en vez de pagar dos meses de fianza sólo pagaría uno".

Los 200.000 jóvenes beneficiados por estas ayudas representan un incremento del 17,57% respecto al trimestre anterior y duplica los de hace un año. Hasta ahora se han beneficiado 350.170 jóvenes. Y cualquiera de los que la han solicitado puede conocer el estado de su tramitación a través del portal del ministerio <http://rbe.vivienda.es>, al que se accede mediante un acceso restringido con el DNI y

Esfuerzo de emancipación

Porcentaje del sueldo destinado al alquiler de una vivienda



Fuente: Ministerio de Vivienda

EL PAÍS

una clave secreta. Más del 56% de los que demandan y cobran la ayuda son mujeres. El 47% de los beneficiarios tiene entre 27 y 29 años, y el 71% paga un máximo de 600 euros al mes. La cuarta parte gana menos de 10.000 euros.

770 euros al mes de alquiler

En la misma línea de impulso al arrendamiento, la Comunidad de Madrid ha firmado 16.700 contratos hasta el pasado mes de marzo. El 72% de las casas ofertadas, con una superficie media de 72,6 metros, tiene un precio medio de 717 euros al mes. En la capital, los casi 8.000 contratos fir-

mados alcanzan un promedio de 773 euros, mientras que se reduce a 662 euros en el resto de municipios.

Hasta el pasado mes de febrero, la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) ha suscrito 12.884 contratos en toda España. "No tiene nada que ver lo que hacemos nosotros con lo que hacen otras administraciones, que se limitan a poner en contacto a propietarios e inquilinos. La diferencia estriba en la gestión integral que hace la SPA, con un estudio detallado de cada caso y un seguimiento del contrato durante toda su duración", comenta un portavoz del ministerio ante esa diferencia de

contratos entre la SPA y el Plan Alquiler de la Comunidad de Madrid. "Captamos propietarios y, en función de los precios de cada zona, proponemos una renta. Y le buscamos un inquilino con garantías para evitar morosidad, entre ellas la de no pagar más del 30% de sus ingresos. Nosotros abonamos la renta al propietario, pague o no pague el arrendatario", explica la misma fuente, quien atribuye el desfase entre ambas alternativas al gasto publicitario de la Comunidad en una oficina móvil de un millón de euros. Al cierre de 2009, la agencia del ayuntamiento gestionaba 12.891 viviendas.



Valencia bloquea el nuevo Centro de Inserción Social desde hace dos años

► El Ministerio del Interior considera que la capital es el lugar idóneo para las dependencias para presos que sólo van a dormir y el equipo de gobierno municipal se desentiende del proyecto

RAMÓN FERRANDO VALENCIA

La construcción del Centro de Inserción Social en Valencia lleva dos años bloqueada ante la falta de respuesta del ayuntamiento, según el Gobierno. El Ministerio del Interior entregó en abril de 2008 al consistorio un listado de solares en Valencia para que eligiera la ubicación idónea. El equipo de gobierno de Rita Barberá no contestó ni dio respuesta a las solicitudes de Interior de sentarse a negociar. El Ejecutivo tiene prisa en abrir las dependencias porque el Centro de Inserción Social (CIS) de la cárcel de Picassent está colapsado.

El Gobierno, como ayer adelantó Levante-EMV, ha descartado construir el complejo penitenciario para presos que sólo van a dormir en los municipios colindantes a Picassent tras la oposición vecinal. La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) —órgano dependiente del Ministerio del Interior— es el ente encargado de buscar los terrenos.

Los responsables de la SIEP mantuvieron el 7 de marzo de 2007 una reunión con el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia en la que le plantearon la necesidad de construir el Centro de Inserción Social. El Ejecutivo le pidió al Ayuntamiento de Valencia ayuda para localizar el lugar idóneo para ejecutar el proyecto, según recoge una respuesta parlamentaria del Gobierno a la concejal popular del

La SIEP ofreció en abril de 2008 al ayuntamiento un listado de solares para que eligiera y todavía no ha recibido respuesta

consistorio valenciano Marta Torrado.

Los responsables del proyecto, siempre según recoge la respuesta parlamentaria, intentaron varias veces por teléfono concretar sin éxito una nueva cita. Ante la falta de respuesta, Interior solicitó la reunión por escrito el 21 de septiembre de 2007 y el 16 de octubre del mismo año.

La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios buscó por su cuenta varios solares y los incluyó en el documento «Vacíos urbanos sobre suelo urbanizable, ciudad de Valencia». El Gobierno remitió al ayuntamiento el documento para que eligiera el que «podía resultar más adecuado para los intereses de la ciudad».

Sin noticias del ayuntamiento

Según recoge la respuesta parlamentaria a Marta Torrado, el Ayuntamiento de Valencia todavía no ha contestado a dicho informe ni a las solicitudes de reunión efectuadas por la SIEP. La edil se mostró ayer por la tarde sorprendida por la versión del Gobierno y dudó de las verdaderas intenciones de Interior.



El CIS de Valencia está en la cárcel de Picassent. M. A. MONTESINOS

LA CIFRA

88 FUNCIONARIOS

CIS de Picassent

► El Centro de Inserción Social de Picassent cuenta con 88 funcionarios para controlar a 580 reclusos.

400 PRESOS

Centro nuevo

► El centro nuevo será complementario al de Picassent. Interior quiere que tenga capacidad para 400 presos.

El Ejecutivo asegura que no adoptará una decisión definitiva sobre la ubicación del CIS hasta que no alcance un acuerdo con el municipio donde se ubique y tenga en su poder los terrenos. El Gobierno, al igual que ocurrió con la ubicación de la nueva cárcel, está teniendo dificultades para conseguir el consenso necesario.

La SIEP considera que el mejor emplazamiento es la ciudad de Valencia porque dispone de un amplio servicio de transporte público que permite que los presos en tercer grado puedan trabajar durante el día e ir sin complicaciones al CIS a dormir. Ante el rechazo de Valencia, la

TERRENOS

Se busca suelo por toda la C. Valenciana

► El Gobierno ha ampliado el abanico de posibilidades y está dispuesto a construir el CIS en cualquier punto de la Comunitat Valenciana. El SIEP pretende edificar un Centro de Inserción Social de más de cuatrocientas plazas para desmasificar el que está en el interior de la prisión de Picassent y que se llama Torre Espioca. El sindicato de prisiones Acaip denunció hace unos días que el CIS Torre Espioca había alcanzado el máximo histórico de ocupación con 580 internos, lo que supone que en ocasiones no haya camas para todos. Acaip considera que es esencial que se construya de forma inmediata el segundo CIS de Valencia porque las instalaciones actuales están colapsadas «al no quedar espacio físico para albergar a más reclusos». Los presos en Picassent tienen problemas para desplazarse porque el horario de autobuses no es muy flexible.

SIEP decidió en octubre construirlo en Paiporta, pero tuvo que dar marcha a atrás cuando lo tenía todo listo ante el rechazo frontal del ayuntamiento. Los alcaldes que se oponen al proyecto aseguran que es una instalación conflictiva porque «estadísticamente el treinta por ciento de los internos de tercer grado reincide». La SIEP estaba a punto de cerrar la compra de los terrenos en Paiporta cuando paralizó en noviembre el proyecto. El alcalde de Paiporta, Vicente Ibor, exigió por carta al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que no instalara el centro en el municipio.



Interior descarta construir el Centro de Inserción Social cerca de la cárcel

► El Gobierno asegura que no tiene intención de instalar las dependencias para los presos que sólo van a dormir a la prisión en los municipios colindantes a Picassent tras la oposición vecinal

RAMÓN FERRANDO VALENCIA

El Ministerio del Interior ha descartado construir el nuevo Centro de Inserción Social (CIS) de Valencia en los municipios colindantes a la prisión de Picassent. El Gobierno ha tomado la decisión tras la oposición vecinal en algunos municipios de l'Horta, que se niegan a acoger el centro penitenciario destinado a reclusos en tercer grado que sólo van a dormir. La primera opción del Gobierno es construir el CIS en la ciudad de Valencia en una parcela de 11.000 metros cuadrados.

La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (Siep) -órgano que depende del Ministerio del Interior- es el ente encargado de buscar los terrenos. El Siep decidió en octubre que el emplazamiento idóneo era Paiporta, pero tuvo que dar marcha atrás cuando lo tenía todo listo ante el rechazo frontal del ayuntamiento.

Interior está analizando otras posibles ubicaciones tanto en la ciudad de Valencia como en otros municipios de la provincia, según recoge una respuesta parlamentaria del Gobierno a la concejal popular del Ayuntamiento de Valencia y diputada nacional Marta Torrado. El ejecutivo advierte de que mientras no localice una ubicación idónea no adoptará una decisión definitiva. El Gobierno insiste en que no tiene «ninguna intención de construir el Centro de Inserción Social en los municipios



El único CIS de Valencia está en el centro penitenciario de Picassent y se encuentra saturado. FERRAN MONTENEGRO

colindantes a la cárcel de Picassent».

Los alcaldes que se oponen al proyecto aseguran que es una instalación conflictiva porque «estadísticamente el treinta por ciento de los internos de tercer grado reincide». El Siep llevaba meses trabajando en secreto en el proyecto de Paiporta, pero tuvo que rectificar en cuanto trascendió la ubicación. El alcalde de Paiporta, Vicente Ibor, exigió por carta al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,

que no instalara el centro en el municipio. Ibor lideró el rechazo al CIS tras recibir en su correo electrónico personal en pocos días más de 300 mensajes de vecinos que se oponían.

Más de 400 plazas

El Siep pretende construir un Centro de Inserción Social de más de cuatrocientas plazas para desmasificar el que está en la prisión de Picassent. Interior baraja construir el centro en el barrio del Cabanyal, donde busca solares.

Fuentes próximas al plan explicaron que Interior considera que Valencia es una ubicación ideal porque dispone de un amplio servicio de transporte público que permite que los presos en tercer grado puedan trabajar durante el día e ir sin complicaciones al CIS por la noche a dormir. Interior ya estuvo a punto de construir el Centro de Inserción Social de Alicante en la capital alicantina, pero al final terminó abriéndolo en verano de 2006 junto a la prisión de Fontcalent. El CIS de Ali-

SATURACIÓN

Urgencia ante el colapso del actual CIS Torre Espioca

► Valencia dispone de un Centro de Inserción Social para reclusos que cumplen el último tramo de su condena y sólo van a la prisión a dormir. El CIS está dentro de la cárcel de Picassent y se llama Torre Espioca. El sindicato Acaip asegura que en los últimos años la falta de plazas en las prisiones ha motivado que se incremente el número de internos en tercer grado, en muchos casos «con criterios muy discutibles» cuyo seguimiento ha sido atribuido a esos Centros de Inserción Social. Según Acaip, en el caso del CIS Torre Espioca la situación es especialmente problemática porque la población interna que se encuentra cumpliendo el tercer grado en el centro ha alcanzado máximos históricos con 580 reclusos, lo que supone que en ocasiones no haya camas para todos. El sindicato considera que es esencial que se construya de forma inmediata el segundo CIS de Valencia porque las instalaciones actuales están «al borde del colapso al no quedar espacio físico para albergar a más reclusos».

cante es de los primeros de nueva generación y tiene 182 plazas. La previsión del Gobierno es que el nuevo centro de Valencia esté abierto antes 2012.

Fuentes del sindicato de prisiones Acaip explicaron que los reclusos en tercer grado que pernoctan en la prisión de Picassent tienen problemas para desplazarse porque no es muy flexible el horario de autobuses. En cualquier caso, el Ministerio del Interior va a mantener abierto el CIS de Picassent.



El gasto de atención a las personas mayores se ha disparado con la entrada en vigor de la Ley de Dependencia. :: RAFA GUTIÉRREZ

Gobierno Vasco y diputaciones marcan diferencias en política social

Las instituciones se enzarzan en polémicas mientras negocian discretamente qué impuestos pagarán los vascos para financiar las prestaciones

:: JAVIER MUÑOZ

SAN SEBASTIÁN. Los socialistas vascos, instalados en la Administración autónoma, y los peneuvistas, que mantienen el control de las diputaciones de Gipuzkoa, Vizcaya y Álava, han encontrado en las políticas sociales un campo de batalla propicio para marcar diferencias y sensibilidades ante el electorado. Cada pocas semanas, el ejecutivo de Patxi López y los gobiernos forales protagonizan un enfrentamiento verbal que zanján enseguida con una foto conjunta, mientras negocian con discreción los impuestos que habrán de pagar los votantes para financiar la atención social. El reciente rifrafe sobre los menores inmigrantes bajo tutela foral –la consejera de Justicia, Idoia Mendia, acusó a las diputaciones de no atenderles como es debido– se ha ajustado al guión habitual, sin que la sangre haya llegado al río. «Acostumbramos a hacer lo mismo. Dejar clara nuestra posición una vez y luego guardar silencio», resumen en la Diputación de Vizcaya.

Pese a la estridencia del último conflicto, el Ejecutivo de Vitoria, la Asociación de Municipios (Eu-

del) y los gobiernos forales no han interrumpido los contactos que mantienen desde hace meses para clarificar no sólo la acogida a los menores extranjeros no acompañados –580 en total–, sino también el conjunto de los servicios sociales de que disfrutará 2,1 millones de vascos durante los próximos años. Un capítulo que abarca desde el cuidado de las personas mayores, hasta los subsidios para personas sin recursos, pasando por las ayudas a colectivos vulnerables, las políticas de inmigración y las subvenciones al voluntariado.

Para hacerse una idea de lo que está en juego, el gasto social supuso unos 1.079 millones de euros en la comunidad autónoma durante 2007, una suma que no ha dejado de crecer con el paulatino desarrollo de la ley estatal de Dependencia y de las más recientes leyes autonómicas de Garantía de Ingresos y Servicios Sociales. Justo cuando había que desarrollar esas dos últimas disposiciones, las diputaciones dejaron de recaudar unos 2.200 millones en 2009, lo que representó una caída aproximada del 17%.

Trabajo de 'cocina'

En este contexto, los encuentros del gabinete de Patxi López con los gobiernos forales y, en menor medida, con Eudel desvían la atención del silencioso trabajo de 'cocina' que realizan las instituciones vascas para ajustar sus manguantes presupuestos al nuevo escenario legislativo de los servicios sociales, concebido en la anterior legislatura, en tiempos de bonanza

económica, pero que hay que aplicar en medio de una crisis fiscal.

La misión de acercar posturas entre las administraciones, que se reparten las competencias sociales en Euskadi, ha recaído sobre un grupo de técnicos autonómicos, forales y municipales que se están reuniendo periódicamente para efectuar una minuciosa tarea. Primero definen una por una todas las prestaciones a las que tendrán derecho los ciudadanos, y luego establecen dónde estarán ubicados los servicios, cuánto costarán y cómo se pueden financiar (impuestos, copago, etc.).

Esos expertos trabajan con un 'handicap' descrito sucintamente a finales del pasado año por el diputado general de Vizcaya, José

Luis Bilbao: «La vaca no va a dar leche suficiente». Y analizan cada tema con arreglo a los principios marcados por el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, quien abogó por un «debate serio» que se ventile al margen de «los medios de comunicación» y que desembocara en un «trabajo de colaboración». Esta última expresión, colaboración, también ha sido utilizada por la Diputación de Álava y aparece con frecuencia en las declaraciones de la consejera Idoia

Técnicos de las tres administraciones forales se reúnen para calcular el coste de los servicios



Un menor gesticula en el centro de Elgeta, donde hubo un motín. :: F. M.

LA RADIOGRAFÍA

► **Subsidios sociales.** Este año cobrarán la renta de garantía de ingresos 58.000 personas; la prestación de alquiler, 16.200 y las ayudas de emergencia, 18.000.

► **Personas mayores.** 47.895 vascos reciben alguna prestación de dependencia.

► **Discapacitados.** Más de 13.400 ciudadanos sufren minusvalías psíquicas en Euskadi. El 87% son atendidos por sus familiares directos.

► **Oenegés.** El ejecutivo de Patxi López ha decidido reordenar las más de 2.000 subvenciones que concedía a oenegés y entidades públicas para proyectos sociales.

Mendia, a la sazón portavoz del Gobierno Vasco, y de su homóloga de Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, que acaba de atajar un posible conflicto de competencias con los territorios históricos y Eudel a propósito de las inspecciones de los geriátricos, centros de día y otros servicios sociales.

Dos visiones

Sin embargo, el espíritu de cooperación de fondo no impide que PSE-EE y PNV intenten dibujar sobre la superficie algunos matices distintos sobre la política social. La controversia de los menores no acompañados, que incide sobre todo en Gipuzkoa, ha servido a los socialistas para desmarcarse del propósito del PNV de distribuir a esos adolescentes por cupos entre las comunidades, una propuesta que el Ejecutivo central había planteado hace un lustro como gesto solidario cuando Canarias estaba saturada de inmigrantes. En cambio, las instituciones forales se han mostrado reticentes al proyecto de la consejera Zabaleta de permitir que los extranjeros tutelados a punto de cumplir los 18 años tramiten la renta de garantía de ingresos y la prestación de vivienda.

En cualquier caso, la confrontación sólo ha durado una semana. Markel Olano y la consejera Mendia se apresuraron a darle carpetazo al pasado miércoles, en una comparecencia celebrada en San Sebastián, en la que ambos apelaron a la «responsabilidad» institucional. Lo cierto es que las tres diputaciones habían acusado a Mendia de «irresponsable» por haber recordado que algunos menores atendidos en establecimientos forales habían llegado a delinquir para no permanecer en esos centros, sino en dependencias cerradas o semicerradas del Servicio de Justicia Juvenil, dependiente del Departamento de Justicia.

No es el único frente que ha cerrado el Ejecutivo de Patxi López. Un día antes de que Mendia y Olano se reunieran en la capital guipuzcoana, el consejo de Gobierno aprobó el decreto de que regulará el órgano interinstitucional de los servicios sociales, un foro en el que tendrán voz las diputaciones y Eudel. La norma resume el espíritu de cooperación que la consejera de Zabaleta pretende transmitir... hasta el próximo rifrafe.